

Área Salud
LA CARA DE LA CRISIS
ALIMENTARIA EN CHILE

Área Habitabilidad
CRISIS DE ACCESO A
LA VIVIENDA

Área Sociales
LA ILUSIÓN DEL
EMPENDIMIENTO

Área Ciencias
POLÍTICA NACIONAL
DEL LITIO

REVISTA N°6 / 2023

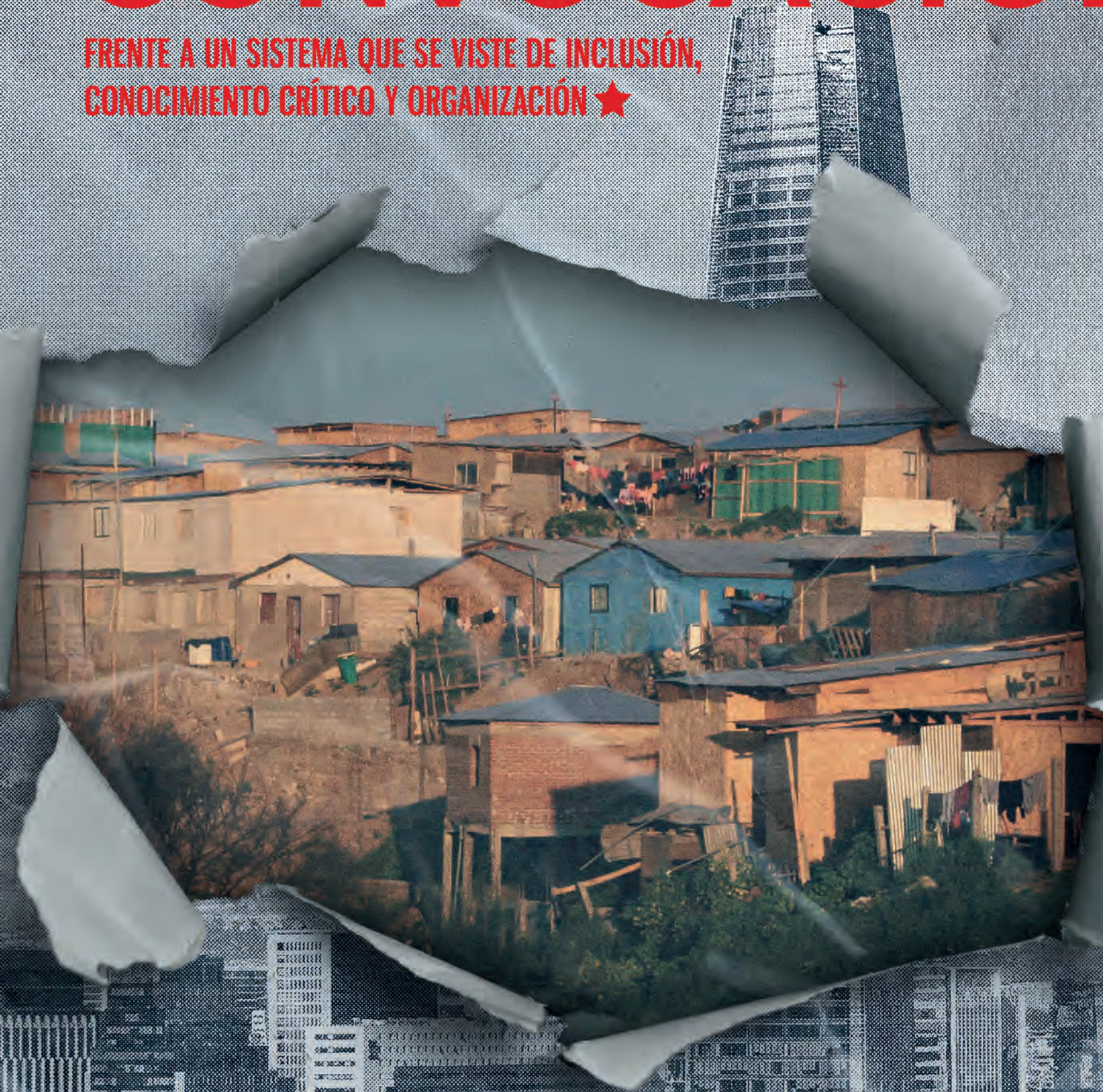
convocacion.cl

CONVOCACIÓN

FRENTE A UN SISTEMA QUE SE VISTE DE INCLUSIÓN,
CONOCIMIENTO CRÍTICO Y ORGANIZACIÓN ★



@CONVOCACION



CONTENIDOS



Área Salud

ULTRAPROCESADOS Y MALNUTRICIÓN

Pág. 4 - 7

Área Habitabilidad

CRISIS DE ACCESO A LA VIVIENDA

Pág. 8 y 9

Área Sociales

LA ILUSIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

Pág. 10 - 14

Área Ciencias

PLAN NACIONAL DEL LITIO

Pág. 15 - 18



¿Qué es Convocación?

Somos una organización de profesionales de diferentes disciplinas, que tiene como horizonte **LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EN UNA JUSTA E IGUALITARIA.**

Consideramos indispensable poner nuestros conocimientos y capacidades **AL SERVICIO DEL MOVIMIENTO POPULAR**, para fortalecer un proyecto alternativo de sociedad.

@convocacion



Relatos Convocacion



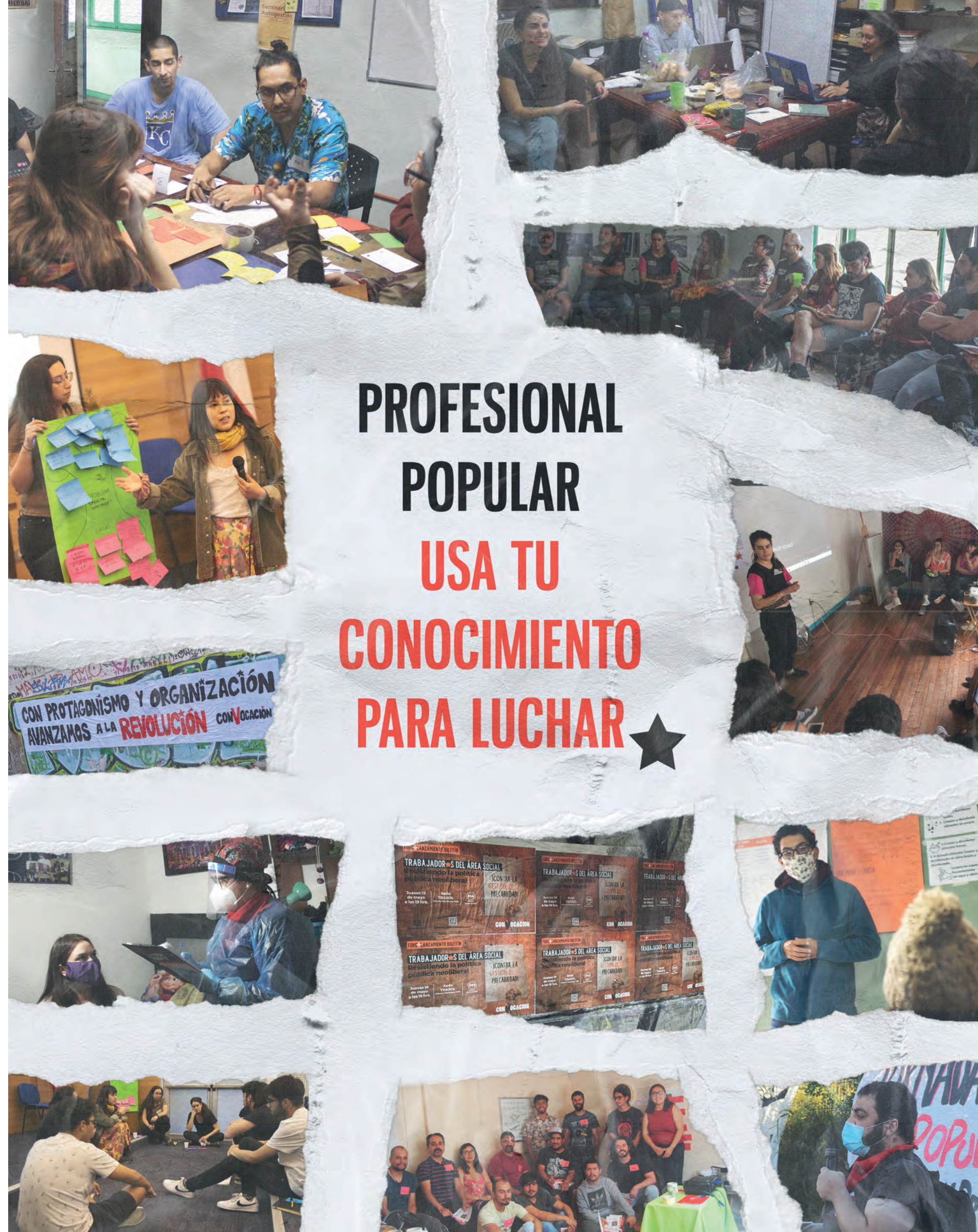
convocacion.cl



equipo.convocacion@gmail.com



PROFESIONAL
POPULAR
**USA TU
CONOCIMIENTO
PARA LUCHAR** ★



ALZANDO LA VOZ PROFESIONAL

Durante los últimos cuatro años se ha agudizado la precariedad de la vida para el mundo popular. La crisis sanitaria y económica han empujado a los hogares populares al borde de la subsistencia, y a muchos por debajo de esta. Las tan aplaudidas medidas anti-inflacionarias como el aumento de la tasa de interés y el ajuste del gasto fiscal han aumentado el desempleo y la informalidad, destruyendo trayectorias de vida, en los sectores populares, que difícilmente podrán ser recompuestas. A pesar de esto, en julio de este año, el gobierno anunció los resultados de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) con bombos y platillos. Aparentemente, la pobreza habría alcanzado mínimos históricos en Chile. ¿Cómo explicamos esta discrepancia? Todo parece indicar que el gobierno progresista aprovecha oportunamente estos indicadores para crear la ilusión de que las cosas están mejor gracias a las políticas e instituciones de este modelo y que ahora sí “la alegría ya viene”. Como Profesionales ConVocación, consideramos que ese relato no es más que una ficción. Basta con darse una vuelta por las calles y poblaciones, con mirar críticamente lo que ocurre en nuestros trabajos, para darnos cuenta que la informalidad, las personas en situación de calle, y el desempleo han aumentado, y que la educación y la salud, física y mental, han empeorado. Es decir, el proceso constante de empobrecimiento al que nos somete el capitalismo en su fase neoliberal se ha agudizado.

Como organización de profesionales populares, buscamos cuestionar esta narrativa, y las condiciones objetivas que busca esconder, es decir, la explotación y desposesión de cada una de las personas trabajadoras que vivimos en este país. Ese es el principal objetivo del N°6 de nuestra Revista, a lo largo de la cual planteamos como el Estado neoliberal despliega políticas necesarias para la reproducción de la acumulación capitalista en diferentes ámbitos, a partir del despojo y empobrecimiento de la mayoría trabajadora del país. Por ejemplo, cómo el “mito del emprendimiento” en realidad oculta formas de trabajo precario e institucionaliza la precariedad social. También plasmamos en una infografía cómo 30 años de po-

lítica de vivienda neoliberal sólo ha logrado profundizar aún más la crisis habitacional en el país, generando una demanda creciente para la especulación del capital inmobiliario. Abordamos, también, la situación de inseguridad alimentaria de nuestro pueblo ante el aumento del precio de la canasta básica de alimentos, debiendo recurrir a alimentos ultraprocesados para optimizar su presupuesto en alimentación y las consecuencias de salud que trae consigo, mientras en nuestros campos y costas se producen frutas y pescados para la exportación. Finalmente, a propósito de la Estrategia Nacional del Litio, problematizamos cómo se mantiene una matriz productiva primaria exportadora la que mantiene la dependencia y subdesarrollo de nuestro pueblo, y no plantea un camino para mejorar sustantivamente sus condiciones de vida a partir del desarrollo científico innovador que agregue valor a nuestros recursos naturales.

Por lo mismo, **hacemos un llamado a las y los profesionales a organizarse en pos de utilizar nuestros conocimientos y técnicas para ser críticos de esta realidad, para aportar a las luchas del pueblo por demandas en torno a la vida digna y para sumar esfuerzos a la recomposición del movimiento popular, para que los sectores populares levantemos nuestro propio poder, hasta disputar la hegemonía de la clase dominante chilena.** Esto implica hacernos parte directamente de las luchas que buscan atacar a las manifestaciones del empobrecimiento capitalista, y a las instituciones que lo sostienen, siempre resguardando que los procesos de lucha nos permitan construir y acumular más poder popular, y no caer en lógicas transaccionales que nos terminan desmovilizando e incluso desorganizando, como lo fue el proceso constituyente. La tarea de construir un poder y alternativa propias, que nos permita transformar este modelo de una vez por todas, y promover de manera genuina el desarrollo integral de cada una de las personas que conforman nuestra sociedad, es sin duda posible, siempre y cuando, nos organicemos en torno a ese objetivo.

★ *Profesionales Convocación*



ULTRAPROCESADOS Y MALNUTRICIÓN, LA NUEVA CARA DE LA CRISIS ALIMENTARIA EN CHILE BAJO EL YUGO DEL MERCADO.

Descubre la cruda realidad de la crisis alimentaria en Chile y cómo los ultraprocesados y el control del mercado afectan nuestra salud y bienestar. En este artículo, nuestra área de salud de Convocación, analiza la inseguridad alimentaria y la falta de soberanía, donde el acceso a alimentos de calidad es limitado por intereses económicos. Consecuencias como la malnutrición y enfermedades crónicas nos obliga urgentemente a combatir y cambiar el sistema.



En nuestros días parece extraño hablar de malnutrición o crisis alimentaria puesto que hoy no es tan evidente la desnutrición clásica que afectó a nuestro país en el SXX cuyas imágenes de enflaquecimiento extremo hacían más evidente el problema de acceso a alimentos para los sectores populares. Hoy la imagen es muy diferente, el sobrepeso y la obesidad son lo más frecuente, sin embargo, representan la misma realidad, un problema de acceso a alimentos que aporten los macro y micronutrientes recomendados en la dieta que son sustituidos por “alimentos” ultraprocesados por su mayor disponibilidad y menor costo, lo cual afecta directamente a la mayoría de familias populares.

Si bien Chile está dentro de los 15 países mayores exportadores agrícolas, se dice que al igual que otros países del mundo, atraviesa por una crisis alimentaria marcada por malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad) e inseguridad alimentaria. Desde mucho antes de la pandemia, organismos nacionales e internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), anticiparon este escenario, pero sin ser críticos sobre las verdaderas razones que causan esta grave condición.

Las consecuencias de esta crisis históricamente las ha vivido la clase popular y se han agravado durante la pandemia y posterior inflamación de la canasta básica de alimentos. En un contexto de alza constante del precio de los alimentos, la presión por optimizar los recursos de las familias y poder llegar a fin de mes, lleva a comprar productos más baratos, de menor calidad nutricional, alimentos ultraprocesados y calóricos, de preparación más fácil y rápida, abriendo paso a una crisis de salud pública al aumentar drásticamente las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como hipertensión, diabetes, dislipidemias, obesidad.

Para comenzar el análisis de esta crisis, es relevante comprender los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria. Según FAO la **SEGURIDAD ALIMENTARIA** se consigue cuando todas las personas, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo,

para satisfacer sus necesidades y preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”. Por otra parte, es importante tener claro el concepto de **SOBERANÍA ALIMENTARIA**: como el derecho de los pueblos y naciones a elegir lo que comen y de qué manera producirlo protegiéndose de intervenciones externas. Dadas estas definiciones, ¿es posible la soberanía y la seguridad alimentaria bajo este sistema? Al analizar esta temática, surgen una serie de contradicciones, ya que si supuestamente vivimos en un sistema económico que produce todo y genera riquezas, ¿cómo es posible que ocurra esta situación?

¿Por qué mientras en los supermercados las góndolas están llenas, aún es latente la inseguridad alimentaria y las familias deben eliminar alimentos de su dieta?

¿Por qué si Chile es un gran exportador de frutas y verduras, estas no se disponen para el consumo interno?

En el presente artículo expondremos cómo se ha llegado a esta situación y su relación con el mercado de la producción y distribución alimentaria con políticas públicas que han dejado en mano de los individuos la “elección de vivir sano”.

Mercado alimentario

Bajo estas definiciones, hoy en día el mercado y la industria alimentaria definen -según sus propias reglas- la mayor parte (si no todos) los aspectos de la producción en Chile. Es decir, qué, cuánto, cuándo y dónde se producen los alimentos.

EN POCAS PALABRAS

La crisis alimentaria en Chile se caracteriza por la malnutrición por exceso y la inseguridad alimentaria. La industria prioriza las ganancias económicas, lo que resulta en alimentos ultraprocesados de baja

calidad y enfermedades crónicas. El Estado no asume un rol activo, dejando la responsabilidad en manos de los individuos. La falta de disponibilidad de alimentos básicos y altos índices de malnutrición

afectan especialmente a los sectores populares. Es urgente repensar las políticas y estrategias para garantizar la seguridad alimentaria y promover una alimentación saludable para todos.

Consumo y utilización biológica

Se refiere a que los alimentos utilizando en los hogares respondan a las necesidades nutricionales, a la diversidad, a la cultura y las preferencias alimentarias.

Estabilidad

Se refiere a solventar y hacer frente a las condiciones de inseguridad alimentaria transitoria de carácter cíclico o estacional, naturales o económicas.



SEGURIDAD ALIMENTARIA

Disponibilidad

De alimentos a nivel local o nacional, tiene en cuenta la producción, las importantes, el almacenamiento y la ayuda a alimentaria.

Acceso y Control

Acceso económico y en cantidad adecuada de los alimentos y control sobre los medios de producción por parte de naciones, pueblos e individuos.

Dentro de esta lógica, la producción alimentaria está supeditada inevitablemente a su valor de cambio por sobre el valor de uso y a las políticas de exportación e importación por sobre el consumo interno, priorizando las ganancias de las propias empresas por sobre las necesidades alimentarias de la población. Esto crea una contradicción clara y profunda, entre lo que podemos entender por seguridad y soberanía alimentaria, y el mercado alimentario en sí mismo. Ya que, si analizamos los alimentos respecto a sus valores, las necesidades de la población, comunidades y ecosistemas debieran ser la primera prioridad en términos de la planificación e incluso desarrollo de los procesos productivos. Básicamente, estar al servicio de ellas y no de los mercados nacionales y transnacionales, que sólo se enfocan en priorizar el aumento de las utilidades, independiente de las necesidades locales y el impacto negativo que generan sus producciones (tanto en las propias prácticas de consumo en la población, como en sus consecuencias ecosistémicas).

Esto lo podemos evidenciar -en una de sus dimensiones- en la priorización de la exportación por sobre el consumo nacional, siendo hoy en día la segunda industria nacional (después del cobre) en exportación alimentaria principalmente a Estados Unidos, China y Japón. Desarrollando modelos productivos según las necesidades impuestas por el mercado internacional, donde, por ejemplo, se ha optado por un modelo de exportación principalmente frutivinícola y agropecuaria, desplazando, por ejemplo, casi la toda la producción de legumbres, cereales y tubérculos (pese a las necesidades hoy día de potenciar el consumo, por ejemplo, de legumbres en la población) sin contemplar la poca disponibilidad nacional de frutas y verduras, en comparación a lo exportado y las necesidades de consumo de nuestro pueblo.

Por otro lado, la irrupción del mercado y sus lógicas, ha puesto sobre la mesa problemáticas como la colusión, especulación y la generación de oligopolios que logran controlar insumos de primera necesidad para las personas. Un caso conocido fue el de la colusión de los pollos, donde los supermercados y avícolas de las que fueron parte **Cencosud** (Jumbo y Santa Isabel), **Walmart** (Líder y Ekono) y **SMU** (Unimarc, Supermercados del Sur) se coludieron entre el 2008 y 2011 con las empresas avícolas **Ariztía**, **Agrosuper** y **Don Pollo**, llegando a tener sentencias superiores a los **\$21 millones de dólares**.

Además, la ocupación y crecimiento de la industria forestal y monocultivos (principalmente frutales) en suelos fértiles del área centro-sur del país, dedicados sólo para la exportación, han agravado la situación respecto a la posibilidad de retomar una producción nacional enfocada en el consumo interno, generando además grandes estragos medioambientales y sociales, como es el caso de las **forestales** en el Wallmapu, las **salmoneras** en Aysén y Magallanes, o la producción de **paltas** de exportación en localidades con crisis hídrica, como la provincia de Petorca.

El poder de la Industria alimentaria de los ultraprocesados

Cuando hablamos de lógicas de mercado en la producción y distribución de los alimentos es fundamental el posicionamiento de la industria de los ultraprocesados en las últimas décadas.

Basta con hacer un escaneo rápido a las góndolas del retail en Chile, para darnos cuenta de que son 7 empresas las que concentran la mayor cantidad de productos disponibles, en su mayoría ultraprocesados que tienen un menor costo de producción y rápida venta.

Esta mayor accesibilidad sumado al marketing y la presión de las familias populares por llegar a fin de mes hace que estas opten por alimentos más económicos, aumentando el consumo de alimentos ultraprocesados en la población, generando que nuestro país se encuentre en el segundo lugar de consumo de alimentos ultraprocesados de América Latina.

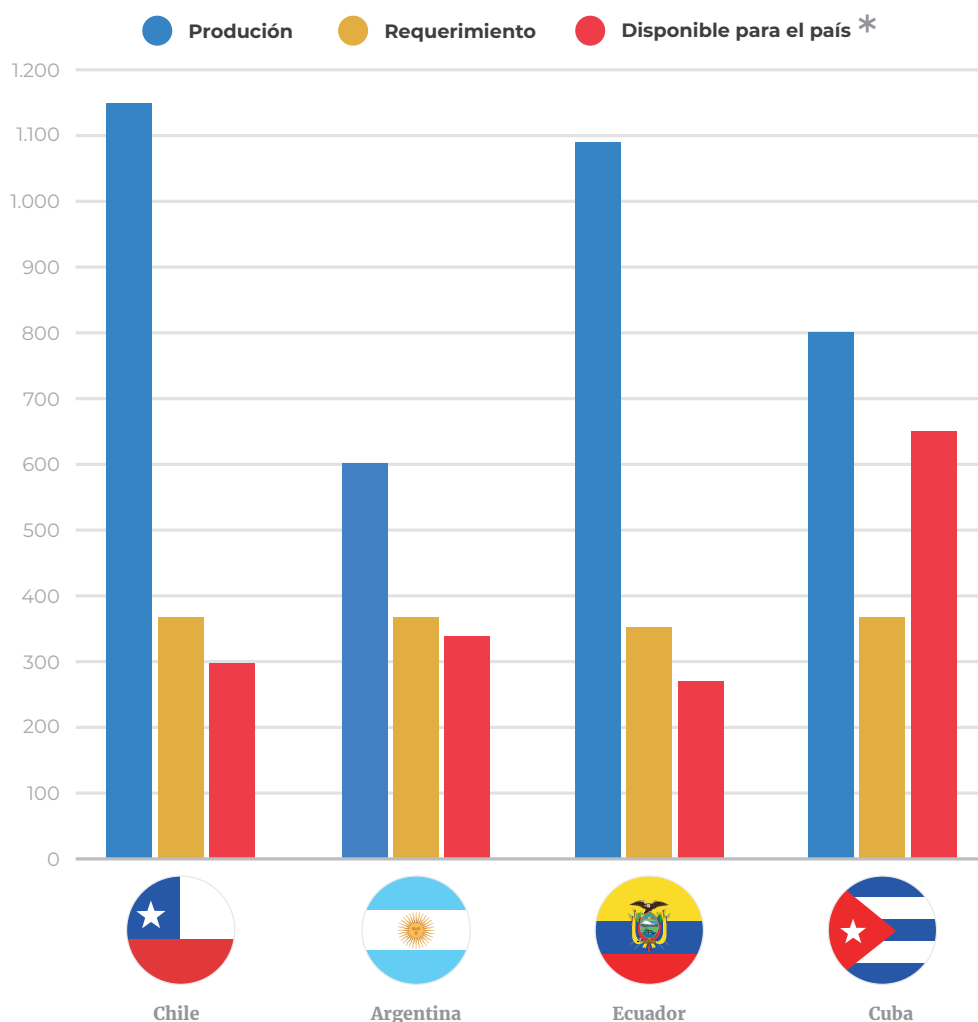
El rol del Estado en el acceso a los alimentos

Como vimos en el apartado anterior, el mercado, los intereses y el gran poder de la industria rigen la producción y distribución alimentaria, ante lo cual el Estado no interviene ni asume un rol a nivel de planificación ni control de la distribución o los precios, lo que explica que la crisis alimentaria en Chile se origine más bien por la falta de acceso y no la falta de disponibilidad de los productos.

En particular, la política del Estado neoliberal chileno transfiere la responsabilidad de una alimentación saludable a los individuos, en tanto, consumidores como el Elige vivir sano y la ley de etiquetado con Sellos alimentarios, de manera focalizada, otorga subsidios a la demanda ante situaciones de crisis como el Bolsillo familiar electrónico y las cajas de mercadería que se entregaron en pandemia y en menor medida brinda acceso universal a alimentos básicos como el Plan nacional de alimentación complementaria para niños menores de 6 años que se entrega en los consultorios.

En particular, las medidas de bonos y cajas de mercadería están más orientadas a la reactivación económica que a la seguridad alimentaria y los grandes beneficiados son los mismos dueños de retail, quienes terminan recibiendo cuantiosos recursos estatales al vender alimentos básicos a precios definidos por ellos.

¿Cuántos gramos diarios de frutas y verduras se producen diariamente, cuántos requiere la población y cuántos se quedan en cada país para el consumo de sus habitantes?



* El cálculo de la disponibilidad se hace de la siguiente forma: “producción doméstica más importaciones, menos exportaciones, más variaciones de las existencias”.

Fuente: Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, FAO.

Ninguna de las medidas de política pública ha logrado resolver de manera contundente el problema de acceso a alimentos de adecuado valor nutricional para las familias, las que se ven en muchos casos obligadas a recurrir a las tarjetas de crédito de instituciones de retail para solventar la compra de alimentos.

Efectos en la salud

La menor sensación de saciedad que generan los alimentos ultraprocesados, la presencia de aditivos, potenciadores del sabor y gran cantidad de azúcares inducen a un consumo excesivo que genera desequilibrios metabólicos y de la microbiota, los que tiene un papel decisivo en enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer. Así como también a nivel de salud mental ocasionan mayor riesgo de depresión, estigmatización, deterioro de la imagen corporal, trastornos alimentarios y baja autoestima. El impacto de este problema de salud se puede dimensionar a nivel global en aumento de discapacidad y

mortalidad por todas las causas y muerte precoz. Chile no es una excepción a esta situación, ya que la malnutrición por exceso es el principal problema de salud pública, con un 74,2% de la población adulta y un 54% de los escolares. Este problema no es homogéneo para toda la población, como ya hemos planteado, afecta directamente a quienes menos tienen, lo que queda demostrado con la encuesta nacional de salud, en donde existen diferencias significativas en la prevalencia de síndrome metabólico en adultos según nivel educacional, siendo de 58% para personas con <8 años de escolaridad versus 29% para quienes tienen >12 años. Lo mismo se deduce de los mapas nutricionales de la JUNAEB, que año tras año informan mayores problemas de malnutrición por exceso en comunas populares como cerro navia, pudahuel, lo espejo versus las comunas del sector oriente de Santiago. De esta manera, el problema de acceso a la alimentación repercute empobreciendo la salud de las familias populares

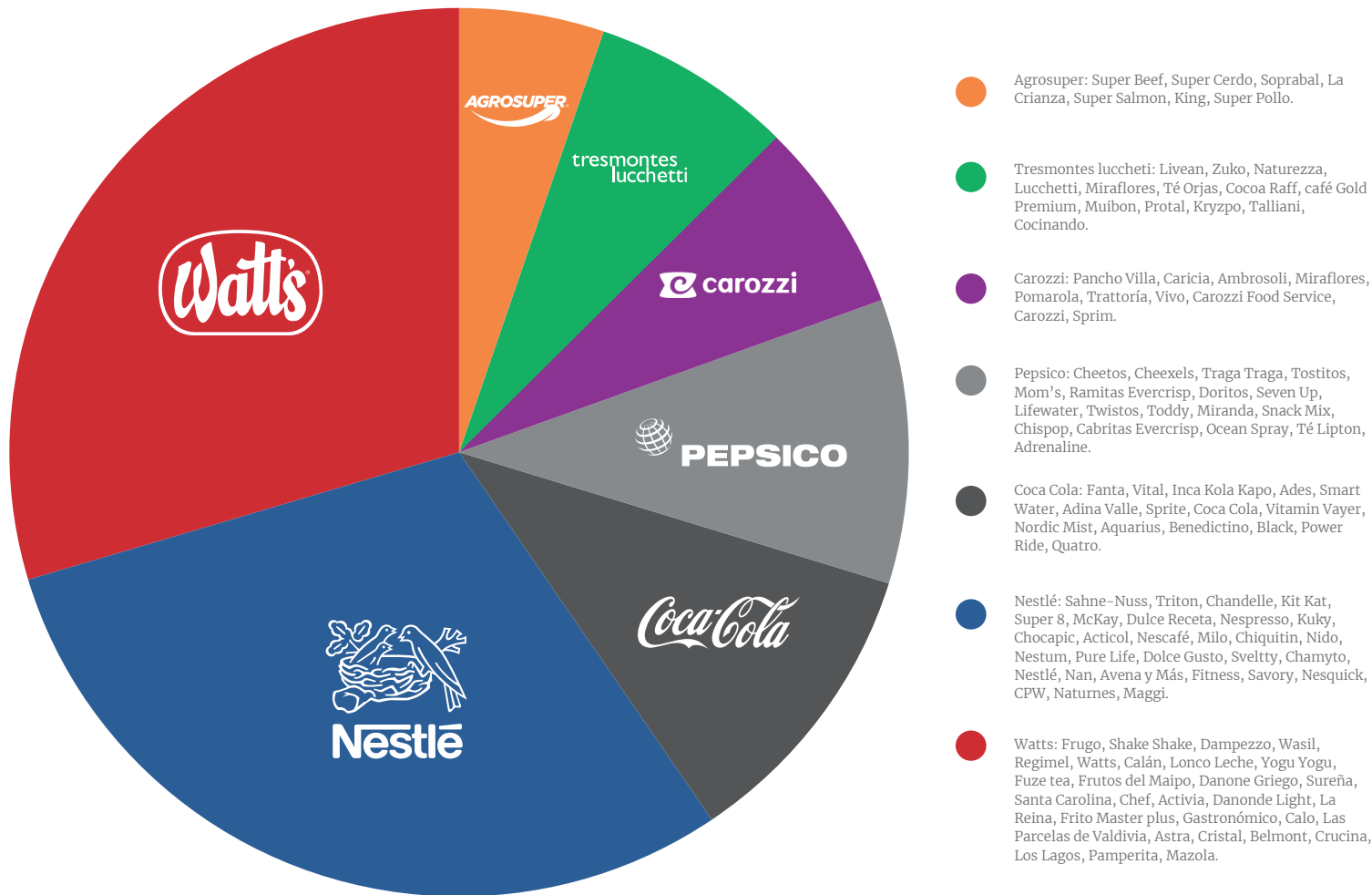
Actualmente, se producen una gran cantidad de alimentos en el país, pero aun así la población se está alimentando de forma desequilibrada, principalmente por la inaccesibilidad económica de alimentos de buena calidad para los sectores populares, por lo que bajo este modelo no es posible asegurar seguridad ni soberanía alimentaria, ya que los intereses de la industria agroalimentaria no está centrada en el bienestar de la población, sino que solo en las ganancias económicas, por otro lado, se ha relegado la salud y las conductas alimentarias de manera individual a las personas, dejando de lado el rol del Estado como promotor de que la población logre la seguridad alimentaria.

Frente a la inseguridad alimentaria que genera este modelo, creemos como organización que:

Debe haber una planificación y control de los alimentos que se producen, se exportan e importan para asegurar alimentos de buena calidad y en cantidad apropiada para el total de la población.

Además, la resolución del problema de la alimentación y la salud no es individual, sino todo lo contrario, debe ser desde un enfoque de ambientes alimentarios, donde la población esté en la planificación y participación de los medios de producción alimentarios, siempre teniendo en cuenta las necesidades de la población por sobre las ganancias.

Es por eso que como ConVocación hacemos un llamado a los profesionales y técnicos de las áreas de la agroindustria y la salud a la organización, donde podamos desarrollar nuestros conocimientos, politizar, y tomar posición junto al pueblo por un acceso a alimentos que garanticen el desarrollo y salud de la población.



Fuente: foodtivist.com

¿DÉFICIT HABITACIONAL?

En Chile no existe escasez de vivienda ni de terrenos, existe...

EN UN 164%

aumentó el stock de departamentos entre los años 2004 y 2022

HAY 3.024

terrenos con potencial de construcción en altura en la RM. El 80% está en manos privadas

CRISIS DE ACCESO A LA VIVIENDA

1. Concentración extrema de la propiedad inmobiliaria

En Chile existe una minoría constituida por grandes propietarios que pueden llegar a concentrar cada uno más de 500 propiedades para uso habitacional.

Hay 25 propietarios en Chile que concentran más de 2.000 propiedades cada uno.

Hay 23 propietarios en Chile que concentran entre 1.001 y 2.000 propiedades cada uno.

Hay 51 propietarios en Chile que concentran entre 501 y 1.000 propiedades cada uno.

MÁS DE 14 MIL FAMILIAS

viviendo en campamentos localizados en distintos puntos del país

MÁS DE 650 MIL FAMILIAS

sin casa. Viviendo hacinados o allegados. Y esta cifra ni siquiera considera quienes arriendan.

SÓLO 1 DE CADA 6 PERSONAS

en Chile cumple con los requisitos para optar a un crédito hipotecario.



2. Política subsidiaria

- 1) Es un traspaso encubierto de recursos públicos hacia el sector privado.
- 2) El Estado entrega una cantidad máxima de subsidios indispensables para contener el conflicto.
- 3) Mantiene el desequilibrio necesario entre demanda y oferta para asegurar el negocio privado.

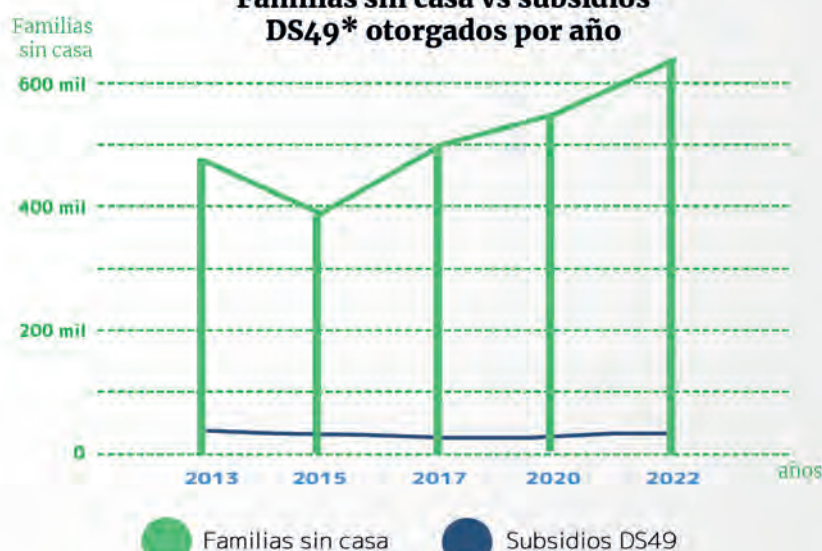
83%

de las familias allegadas deserta u opta por no postular a raíz de la burocracia y el tiempo.

+10 años

puede tardar una familia en lograr acceder a una vivienda a través de este subsidio.

Familias sin casa vs subsidios DS49* otorgados por año



*Principal subsidio otorgado a las familias más pobres.

El Plan de “Emergencia” Habitacional del Gobierno de Boric

No plantea ningún cambio sustantivo que apunte a revertir el nivel de control del gran capital inmobiliario sobre los procesos de desarrollo urbano y producción habitacional, ni tampoco alguno que apunte a fortalecer el rol del Estado, el cual se mantiene como mero facilitador de recursos y, por tanto, cómplice del enriquecimiento privado con dineros públicos.

3. Control y monopolio privado de la construcción

Gremio de mayor influencia en Chile, han decidido la política habitacional por más de 70 años.

Las mismas cifras de la CChC evidencian que existe una gran cantidad de casas y departamentos desocupados y disponibles para habitar y que no se han vendido.

Han promovido y se han enriquecido a partir del acaparamiento inmobiliario, arrebatándole a miles de familias populares un recurso vital para vivir en la ciudad.

Aprovechan su control del mercado inmobiliario para absorber los recursos del estado en función de su propia ganancia y en desmedro de la cantidad y la calidad de las viviendas sociales

De acuerdo al gráfico, la cantidad de subsidios que se han entregado en todos los gobiernos precedentes, incluido el actual, **es insuficiente frente al alto número de familias que necesitan una vivienda.**

A considerar...

La creación e implementación de la política urbana y habitacional impulsada por el Estado en dictadura y promovida por los gobiernos posteriores, incluyendo el actual, a través del modelo de subsidio habitacional y la entrega de la responsabilidad de gestión, promoción y construcción en los agentes privados, constituye una importante actividad de acumulación capitalista, y uno de los principales focos de conflicto en la apropiación del espacio urbano por el capital nacional e internacional, favoreciendo la especulación inmobiliaria en torno al suelo y la vivienda.

Te invitamos a profundizar sobre la crisis habitacional en nuestro reportaje. Escanea el siguiente código QR:



REPORTAJE
POLÍTICA HABITACIONAL
DE CHILE

LA ILUSIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

El pueblo trabajador enfrenta crisis socioeconómicas constantemente. El Estado propone el emprendimiento como una solución para sortear lo anterior, pero los programas sociales no logran cambiar esta situación. En el siguiente artículo se analizan datos sobre el trabajo y los programas de emprendimiento, y se presenta un relato ficticio basado en la experiencia de una vendedora de jugos beneficiaria del programa FOSIS, entrevistada en marzo de 2023. Estos ejemplos muestran cómo el emprendimiento es una ilusión con consecuencias negativas para la clase popular.



En el contexto de un capitalismo neoliberal cuyas contradicciones en lo económico y en lo social se van haciendo cada vez más evidentes, las condiciones de vida de la mayoría popular se agravan exponencialmente. Frente al aumento del desempleo, los salarios miserables, la precarización de las condiciones laborales y una situación generalizada de inestabilidad, la cultura dominante instala transversalmente en la sociedad la noción de que todas las personas pueden “ser su propio jefe/a”, presentando el “emprendimiento” como una más de las “oportunidades” que ofrece y garantiza la sociedad del “libre mercado”. No obstante, las cifras y las experiencias de vida en torno al emprendimiento contradicen y echan por el suelo esta fantasía, dando cuenta con ello que este discurso opera como una manifestación más de que la cultura dominante sólo sirve a los intereses dominantes, y mantiene a la mayoría popular resignada permanentemente a su situación de dominación.

A fines de los 90’, los gobiernos de la Concertación, bajo el supuesto desafío de “superar la pobreza”, comienzan a impulsar diversos programas de fomento al emprendimiento y habilitación laboral. Estos pretendían presentarse como una de las grandes respuestas ante el enorme problema de inestabilidad y precariedad laboral que atravesaba al pueblo tras la instauración del neoliberalismo en Chile. Esta nueva etapa del capitalismo implicó una serie de transformaciones en las condiciones de la clase trabajadora, donde la flexibilidad contractual y horaria, la subcontratación, la disminución de los salarios reales, la falta de seguridad y protección laboral se convirtieron en la norma hasta el día de hoy. Todas estas medidas, que buscaban reducir al máximo los costos asociados a la fuerza de trabajo (de manera de aumentar los niveles de ganancia para el capital) y reducir la capacidad de las organizaciones sindicales, fueron enarboladas bajo el concepto de “flexibilidad laboral”, presentándolas como un cambio a favor de una mayor “libertad” y autonomía” para las clases populares, cuando en realidad, lo que hicieron fue asegurar a la clase capitalista una completa libertad para disponer a su antojo de la fuerza de trabajo, y

EN POCAS PALABRAS

Desde los gobiernos de la Concertación se busca “superar la pobreza” a través de programas de fomento al emprendimiento y el empleo. Sin embargo, la realidad laboral de la clase trabajadora se ha vuelto más precaria y vulnerable.

Las medidas de desempleo esconden realidades de precariedad laboral, y el aumento del trabajo por cuenta propia y sus niveles de informalidad son características de la actual estructura laboral, en la cual los microemprendimientos se caracterizan por

generar ingresos mínimos y poca estabilidad. Se vuelve necesario cuestionar y denunciar las bases de estos programas, y no reproducir a ciegas una política que contiene el descontento y solo gestiona la pobreza.

también prescindir de ella, dependiendo de lo que dictaran sus propios intereses económicos.

Uno de los indicadores que toma el pulso al mundo del trabajo remunerado, es la tasa de desempleo, que al tercer trimestre de este año fue de un 9% (trimestre enero-marzo 2023) , la cual parece encontrarse en cifras relativamente estables, tras haber alcanzado un 12% a inicios de la pandemia en 2020.

Si profundizamos el análisis y consideramos otros indicadores, podemos evidenciar que la realidad de la clase trabajadora es muchísimo más grave y compleja de describir. Esto, ya que la tasa de desocupación solo considera a las personas que “buscando trabajo, no han encontrado un empleo remunerado”; invisibilizando a otros grupos relevantes, por ejemplo: (a) aquellas personas que están disponibles para trabajar, pero no están buscando en estos momentos (por ejemplo, debido a labores de cuidado), y (b) aquellas personas que, estando en un trabajo, estarían disponibles para aumentar sus jornadas laborales (por ejemplo, quienes trabajan media jornada y tienen la necesidad de mayores ingresos para subsistir). Al incluir a este conjunto de personas que, teniendo o no una ocupación, necesitan trabajar más horas remuneradamente (ya que con sus ingresos no es suficiente), estas representan un 21 % del total de personas ocupadas y aquellas que necesitan estarlo (tasa de subutilización del trimestre junio-agosto de 2023), es decir, 1 de cada 5 personas está sin empleo o bien requiere de más horas de trabajo remunerado en Chile. En plena pandemia este valor ascendió a un 44% (trimestre abril-junio 2020), es decir, 2 de cada 5 personas se encontraba en esta situación.

Sabemos bien que, tener un empleo en Chile, no es garantía de obtener un salario digno, estabilidad contractual, ni protección social. De hecho, a diferencia de las características de la estructura laboral del siglo XX, hoy nos encontramos en un escenario marcado por otros elementos como es el aumento del trabajo por cuenta propia y la informalidad. La informalidad laboral hace alusión a las actividades o unidades económicas que no se encuentran formalizadas y no están sujetas a los sistemas de protección social (pensiones, salud, seguro de accidentes, etc.). En los últimos cinco años, la tasa de informalidad entre trabajadores y trabajadoras por cuenta propia es mayor al 60% desde que se calcula este indicador, llegando a estar por sobre el 70% durante la pandemia (Cuadros Estadísticos INE “Serie: Informalidad laboral por

categoría en la ocupación ”).

Día a día, vemos cómo esta realidad se multiplica, reflejada en el aumento de la venta ambulante de comida y artículos de todo tipo, en las colas de las ferias, en la venta de productos y servicios por internet y redes sociales, en el transporte público, en los nuevos negocios instalados en los patios delanteros de las casas. Bajo distintas formas, la clase popular ha recurrido a segundos (e incluso terceros) empleos, como una estrategia urgente para aumentar los siempre escasos salarios.

Ante tal escenario, el discurso oficial recurre insistentemente a la noción de “emprendimiento”, en un esfuerzo por hacernos creer que, con esfuerzo y constancia, todos podemos “ser nuestro propio jefe o jefa”.

El emprendimiento se define como las personas que crean trabajo para sí mismas y potencialmente para otras, por medio del establecimiento y operación de una empresa (OIT, 2020), y en Chile se establece que el microemprendimiento son las personas que trabajan por cuenta propia y quienes tienen un máximo de nueve personas a su cargo (VII EME, 2022). Según la VII Encuesta de Microemprendimiento (2022), aproximadamente, una de cada cuatro personas ocupadas en Chile es microempresaria, de las cuales el 88,8% es cuenta propia y solo el 11,2% genera empleo para otras personas (VII EME, 2022).

Al analizar las ganancias que se obtienen por el microemprendimiento, se observa que estas son sumamente bajas: el **52,6% de estas personas gana un sueldo mínimo o menos**, y en el caso de las **mujeres este porcentaje asciende a un 70,4% (VII EME, 2022)**. Es decir, prácticamente la mitad de los microemprendimientos ganaba \$380.000 o menos a mediados de 2022 (fecha de aplicación de la encuesta). A su vez, el 58,3% de los microemprendimientos son informales, es decir, no están sujetos a mecanismos de protección social ni registrados en el SII, y nuevamente en las mujeres esta proporción asciende al 63,2%. Del total de microemprendimientos, el 17,4% mantiene una deuda debido a su negocio, de los cuales, algo más de un tercio (36,2%) la tiene con una institución bancaria o casa comercial, cuya cuota mensual supera los \$300.000 en el caso de las primeras y los \$150.000 en las segundas.

La ilusión del emprendimiento

El relato que se describe a continuación es la historia de una mujer usuaria del FOSIS, donde se narran una serie de pasos que la llevaron de ser una trabajadora ambulante a una “microempresaria del programa”, endeudada y atravesada por nuevas formas de precariedad laboral. Con el relato se busca visibilizar y hacer un análisis crítico de los programas de emprendimiento, como una expresión más de la Política Social de carácter neoliberal.

Mi malestar

¡Al fin me aceptaron en el FOSIS!

Ese fue el mensaje expresado a mi familia, un mensaje que guardaba esperanza para salir de la situación económica en la que estábamos... pero si me hubieran advertido de las deudas y rabias que se venían por ingresar al programa, por el contrario, hubiera sido un grito de espanto...

Entonces, considerando estos datos y la experiencia de la usuaria relatada más abajo, nos preguntamos ¿es el emprendimiento una opción dignificadora para el pueblo trabajador o es una nueva forma de precariedad laboral y social en el neoliberalismo? ¿Los programas del Estado buscan realmente superar la pobreza o solo gestionarla?

Actualmente, en Chile existen más de diez programas y fondos de microemprendimiento orientados a las clases populares, diseñados por organismos como el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), que articulan a su vez a los Ministerios de Desarrollo Social y de Economía. “Emprendamos Semilla”, “Apoyo al plan laboral”, “Capital Abeja” son algunos de los programas dirigidos a quienes quieren comenzar con un emprendimiento, los cuales consisten en la entrega de infraestructura, capacitaciones realizadas por consultoras privadas y transferencias monetarias a las personas seleccionadas. Para ser “beneficiado” uno de estos programas, las personas deben postular respaldando su condición de precariedad (cesantía, trabajo informal, criterios de vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares). Del total de microemprendimientos que requirieron un capital inicial para comenzar con su negocio, el Estado financió a menos del 3% de la población, y la gran mayoría (74%) lo hizo con recursos propios.

La gestión de los programas antes mencionados, se basa en la **focalización** y la selección de usuarios, en la **externalización** de los servicios de capacitaciones a empresas privadas, en la generación de indicadores de gestión como eje central para sustentar su continuidad, y por el subsidio mínimo del Estado que permite el ingreso sólo a aquellas personas que cumplen con el delimitado perfil que el programa establece y que por sus propios medios no podrían emprender, ya que no cumplen con los requisitos que imponen los bancos para otorgar créditos.

Estas características reflejan la visión y lineamientos que tiene el Estado neoliberal para gestionar la pobreza, **poniendo un manto de “formalidad” a lo que evidentemente no es más que trabajo informal, consolidando una lógica de “institucionalizar” la precariedad social**

que se extiende sobre la mayoría popular. El FOSIS y una serie de programas municipales y estatales organizan la intervención social bajo el paradigma de la Nueva Gestión Pública. Este paradigma se caracteriza por traer a la administración pública el pensamiento de negocio y habilidades tecnocráticas propias del mundo empresarial, tales como, los controles burocráticos y de gestión; la restricción presupuestaria y las racionalizaciones financieras de los programas sociales, haciendo que estos estén más enfocados en la medición de indicadores cuantificables y no en el impacto social y económico a mediano y largo plazo de su intervención (Guerrero, 2009). **Los programas de emprendimientos son medidos bajo esta lógica, y no por los cambios reales que genera su intervención.**

Por ejemplo, para medir la efectividad del Programa Emprendamos Semilla se emplea como indicador de logro que en el año 2021 “un 88% de los usuarios del Programa que terminan la intervención incrementan sus ingresos en a lo menos un 5%”. Además de ser un “aumento” sumamente mezquino, considerando que se trata de una política pública promovida por el Estado, habría que preguntarse: ¿qué sucede luego de un tiempo transcurrido, cuando las personas dejan de ser asistidas? ¿Cuáles es el impacto real de los millonarios recursos invertidos en la externalización de las capacitaciones y la compra de insumos? ¿Cambia realmente la situación laboral, económica y social de las personas “beneficiarias”?

¿Cambia realmente la situación laboral, económica y social de las personas “beneficiarias”?

En la gestión del actual gobierno de Boric, que clamaba que “Chile sería la tumba del neoliberalismo”, se ha mantenido la misma lógica de mercado en el desarrollo de la política pública, tal como lo hicieron las administraciones anteriores: se amplía la cantidad de cupos (a 29 mil aprox. en el 2022) y el monto máximo que se entrega (hasta \$650.000 en el mismo año).

Mis inicios...

Llegué a vivir a Chile porque oí que acá había más trabajo y eso me permitiría construir un mejor futuro para mi familia. Empecé a trabajar haciendo aseo en empresas con turnos de noche, y como no me alcanzaba y nadie más me contrataba, empecé a vender en la calle durante el día, como muchas de mis vecinas y conocidas.

Mi nuevo sustento

Un carro de supermercado y un exprimidor eran nuestras herramientas de trabajo para vender jugo de naranja. Teníamos una agrupación de vendedores y nos pasábamos la voz cuando venían los pacos, porque les teníamos miedo.

Todas vendíamos sin permiso, la mayoría migrantes y no todas con los papeles al día, y además varias estábamos con nuestros bebés y coches. A pesar de todo, trabajar de esa forma me acomodaba, porque yo manejaba los horarios, podía moverme a otros sectores cuando llegaban los pacos o cuando bajaban las ventas y también podía variar los productos, pero igual era un trabajo peligroso, hartas veces perdí la mercadería y nos correteaban todo el día.

Lo cierto, es que esa ilusión del capitalismo neoliberal como garante de la “libertad” y la “competencia”, promotor de la “innovación” y “creador de empleos” se va cayendo a pedazos. El modelo económico va mostrando cada vez más su carácter eminentemente rentista, donde la simple posesión de capital (bajo forma de propiedades inmobiliarias, pasivos, etc.) siempre tiene un retorno de inversión mayor y crece más rápido que cualquier actividad económica que produzca valor para la sociedad. Poseer capital termina siendo siempre más rentable que innovar. Esta simple verdad, echa por el suelo el mito de la “movilidad social” y la fantasía del “emprendimiento”.

Aunque ahora estoy “regular”, si saco los cálculos gano menos que antes, cuando era ambulante. Me endeudo para comprar comida, no me alcanza para nada más.

***Parte del relato de trabajadora FOSIS**

Bajo un modelo económico cada vez más rentista y especulativo, la balanza está siempre a favor de aquella minoría que posee y acapara propiedades, que se enriquece cada vez más a partir de la desposesión de la mayoría y sin producir ningún valor. Ante tal escenario, la ofensiva dominante debe construir un imaginario donde los resultados del “éxito” de cada persona son directamente proporcionales al esfuerzo individual, promoviendo la idea de que “se puede ser lo que uno quiera”.

La fantasía del “emprendimiento”, ha permitido al sistema de dominación contener un problema social que afecta transversalmente a toda la clase trabajadora, y reducirlo a un conflicto individual, susceptible de resolverse mediante un simple cambio de actitud personal. El relato del “emprendimiento” se enmarca en el discurso exacerbado de

Como caí en el engaño del FOSIS

Un día, una compañera empezó a hablar de unos fondos, con los que nos podían dar financiamiento y permisos para sostener nuestros negocios. Fuimos a la municipalidad para pedir más información y ahí nos hablaron del FOSIS, que tenía programas de apoyo al emprendimiento, nunca antes lo había escuchado. Año tras postulamos, intentando cumplir con la “idea de negocio” o con los requisitos socioeconómicos, para acreditar nuestra pobreza.

Cuando entramos al FOSIS nos estuvieron capacitando dos años, distintos profesionales nos enseñaron marketing, computación, atención al cliente, etc. Las clases eran de lunes a viernes, teníamos que asistir a todas, porque si faltábamos a tres nos echaban



del programa. ¡Era terrible!, porque me quitaba mucho tiempo sin recibir paga y perdía los mejores horarios para vender con mi carrito de jugo. Pero ahí estábamos empeñadas para no perder la oportunidad que se nos había dado y poder tener el financiamiento, que era lo que más queríamos todas.

Cuando se acabaron las capacitaciones, y nos titulamos de “emprendedoras” nos comentaron que dependería de nuestro esfuerzo y la habilidad que teníamos como vendedoras. Ahí nos dimos cuenta que el programa no incluía ningún seguimiento, ni apoyo posterior.

las “virtudes de una sociedad diversa”, que enarbola el “derecho de ser diferente”, para ocultar la desigualdad inherente al capitalismo.

La única verdad, tras la ilusión del “emprendimiento”, es el esfuerzo de la clase dominante por convertir, discursivamente, un sistema injusto en una especie de certamen deportivo, una competencia imparcial en la que todos pueden participar y donde los premiados son los mejores. En el fondo, de lo que se trata es de presentar como una “oportunidad de desarrollo personal”, lo que en realidad no es más que una brutal desigualdad estructural, y de paso, destruir cualquier identidad colectiva que pueda derivar en un esfuerzo organizativo, desalojando cualquier potencial amenaza de que esa mayoría popular, precarizada y empobrecida, pueda constituirse en fuerza social.

Quienes trabajamos en el área social evidenciamos desde cerca cómo estos programas sólo gestionan la pobreza en la que se encuentra el pueblo. Nos terminamos acostumbrando a que nuestro trabajo no es realmente una “intervención” para modificar la realidad, sino que una orientación dentro de las escasas posibilidades del sistema. Nuestra posición como profesionales fluctúa entre la vocación que ponemos a nuestros trabajos y la pasividad; el conformismo con que “las usuarias están un poco mejor que antes” y la frustración que nos genera la maquinaria sin sentido que debemos mover.

Es más, no podemos negar que, ante la desesperanza, la angustia y bajo un discurso aspiracional que nos transmiten por todos los medios, también hemos pensado y nos hemos autoconvencido que trabajando independientes y haciendo nuestro propio emprendimiento, lograremos tener un mejor sueldo, pero esta no es una solución profunda a nuestro problema. Es urgente que cuestionemos las causas estructurales del problema de precariedad laboral y denunciemos que los programas y fondos de microemprendimiento promovidos por el Estado solo buscan institucionalizar o dar un “paraguas de formalidad”. Esto termina perpetuando una nueva forma de precarización laboral y un aumento de los niveles de endeudamiento en la clase popular, promoviendo aún más el empobrecimiento.

Frente a la precaridad y empobrecimiento que genera la falsa ilusión del emprendimiento, **creemos como organización que:**

Como Área Sociales de Profesionales ConVocación, hemos venido trabajando en un análisis crítico de la Política Social Neoliberal, la cual evidenciamos que tiene graves consecuencias tanto en el pueblo, como en las y los trabajadores técnicos y profesionales que nos desempeñamos en estas áreas.

Una política social que mantiene una estructura gerencialista, que promueve la competencia para demostrar quién está peor en un contexto de precariedad laboral generalizada, no solo entrega migajas al pueblo sino que refuerza una manera de contener y gestionar la pobreza, poniendo a las y los trabajadores de esta área como los administradores de esta política.

Así, la ilusión del emprendimiento se disuelve en su ejercicio mismo, donde las bajas ganancias, la informalidad y la inestabilidad terminan siendo la norma de esta forma de trabajo. Finalmente, todo el dinero invertido en capacitaciones e infraestructura, que es transferido a consultoras privadas y empresarios, termina siendo un gasto enorme para el fisco y con un nulo impacto en las transformaciones de las condiciones laborales y mucho menos en el desarrollo productivo del país.

Hoy en día urge desarrollar un proyecto colectivo y popular de sociedad, que transforme las raíces de la injusticia y nos permita un devenir digno para todas las personas. La tarea hoy es darle forma y fuerza a nuestras ideas, y por eso queremos invitarles a continuar desarrollando esta área de trabajo, para ampliar la discusión a diversas compañeras y compañeros.

Cuando nos dieron los carritos oficiales con el logo del FOSIS fuimos un “boom”. Como cumplíamos con todos los reglamentos de la municipalidad, podíamos vender tranquilas. Pero nos empezamos a dar cuenta de otros problemas... Primero fue que la patente sólo nos autorizaba para vender “jugo de naranja”, no tenía permiso para vender frutas o yogur que es lo que más salía, y si me llegaban a cachar vendiendo otra cosa me podían multar y quitar el carro. Tampoco nos podíamos mover de la esquina asignada, porque nos exponíamos a un parte.

Mis deudas y angustias

Para mantener el carrito tengo que pagar la patente cada 6 meses y además, un arriendo de 80 lucas para guardarlo en las noches. Con

la pandemia y el aumento de todos los precios, viví muchas precariedades, me endeudé hasta el cuello, pedí muchos préstamos a casas comerciales y al banco. Aunque ahora estoy “regular”, si saco los cálculos gano menos que antes, cuando era ambulante. Me endeudo para comprar comida, no me alcanza para nada más.

Al final el carrito no era todo

Hace poco volví a postular al FOSIS. Me avisaron que me lo gané, pero nunca me vinieron a ver aquí donde vendo, por eso nunca recibí nada. Me cansé de seguir postulando, porque es mucha pérdida de tiempo y de verdad es muy frustrante.

“POLÍTICA DEL LITIO”

NI ESTRATÉGICA NI NACIONAL, MISMO EXTRACTIVISMO Y DEPENDENCIA DEL CAPITAL

Las riquezas de Chile han sido históricamente explotadas por los privados, los que han tenido una posición privilegiada para aprovechar ganancias que le corresponden a la sociedad en su conjunto. Esto ha sido por medio de políticas de carácter privado, mientras el Estado se convierte en un actor regulador que supuestamente tiene un rol. El reciente anuncio de la Política Nacional del Litio consagra lo que se ha perpetuado como el cobre, salitre y otros recursos naturales, generando situaciones de dependencia económica, falta de desarrollo y la pérdida de la posibilidad de un desarrollo estratégico.



El Boom del Litio

El litio, a pesar de ser un mineral explotado por décadas, ha suscitado mayor interés económico el último tiempo. Su precio ha aumentado de manera considerable desde 2016, año en que se promueven diversos proyectos tecnológicos basados en baterías de litio, como por ejemplo, el caso de los autos eléctricos. Tan solo en 2021, el precio del litio aumentó en un 500% en el mercado de commodities chino.

El denominado boom del litio posiciona al mineral como el más prometedor en términos de mercado. Se estima que su demanda seguirá creciendo, proyectando un aumento hasta 500% mayor a la actual para el 2050. Al aumentar la demanda en los mercados los capitalistas ven una oportunidad de negocio, por lo cual buscan disponer de este recurso y para ello echan mano a los países que tienen altas reservas de litio, como Bolivia (23,6%), Argentina (21,3%) y Chile (11%), los que concentran la mayor reserva mundial.

Este tipo de recursos minerales son clave para el desarrollo económico de los países debido a las grandes riquezas que puede significar su extracción y refinamiento, por lo que el carácter de estos es estratégico, ya que no solo implican altos niveles de ganancia, sino que también el encadenamiento y desarrollo de otros sectores productivos y una posición de relevancia internacional. Sin embargo, los países que dominan la economía mundial han impulsado negociaciones comerciales que les permitan instalar sus inversiones en la explotación del recurso natural, lo que ha suscitado una serie de presiones a países como el nuestro, para modernizar su institucionalidad y movilizar el mercado del litio en favor de los intereses de estos gigantes transnacionales.

Tomando esto en consideración, el gobierno anunció en mayo de 2023 la Estrategia Nacional del Litio, que se supone busca definir el rol del

Estado y actores privados en su explotación, ante ello nos preguntamos: ¿es una política estratégica? ¿Responde a intereses nacionales?

Rol del Estado y Empresa Nacional del Litio

La estrategia propuesta por el gobierno de Boric resalta principalmente la idea de levantar una empresa nacional, la cual tendría una participación en la explotación de litio que compita con el sector privado en todo el proceso productivo.

Considerando que los recursos mineros son estratégicos para el desarrollo del país, el Estado no debiera tener tan sólo “una cuota de participación” entre otros actores privados, sino que un rol central, pues es el único actor que puede tener una mirada global y con perspectiva estratégica de desarrollo, condición fundamental para planificar la actividad económica de la minería y asegurar que esta responda a los intereses nacionales.

Peor aún, en el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio no existe siquiera una “cuota de mercado” destinada a la empresa nacional del litio, así como tampoco una superficie de exploración o explotación que permita proyectar un desarrollo económico propio, mientras que los contratos con empresas chinas, francesas, estadounidenses y australianas no han perdido oportunidad de proyectarse.

Lo cierto es que se anuncia la eventual creación de una empresa nacional como distracción para generar la apariencia de un gobierno que aparentemente busca promover un rol protagónico del Estado y una explotación del litio con sentido estratégico para el país, cuando en realidad se aborda desde una lógica absolutamente neoliberal; es decir, manteniendo el control privado sobre este preciado recurso siempre en provecho del gran capital nacional y transnacional, repro-

EN POCAS PALABRAS

La riqueza minera de Chile tiene un potencial estratégico, ya que nos permitiría desarrollar la economía, industria, ciencia y tecnología. Sin embargo, su explotación y las riquezas producidas están hacia varias décadas capturadas por los

privados, con un Estado debilitado y subordinado a sus necesidades. En la reciente Política Nacional del Litio anunciada por el gobierno hay una continuidad a esta historia minera, lo cual perpetúa nuestro modelo económico dependiente, inestable e incapaz de

desarrollarse. Para superar esta lógica, proponemos una serie de principios, en los cuales un nuevo tipo de Estado figura como el actor central, quitándole el espacio a los privados y aprovechando las riquezas para Chile y sus necesidades.

duciendo la situación de dependencia y subordinación a los intereses que dominan la economía a nivel mundial y, por lo tanto, en contra de los intereses nacionales.

Que exista una empresa nacional no asegura tener una posición relevante en el mercado, ser un actor preponderante o siquiera aprovechar las riquezas naturales para las necesidades de la población. Lo anterior se puede corroborar con el ejemplo de Codelco y la explotación del cobre, ya que a pesar de existir una empresa de carácter estatal que compite con privados, los mayores yacimientos y riquezas obtenidas

empresa fueron utilizadas para la compra de bonos en el mercado financiero internacional, en desmedro de reinvertir en el desarrollo propio y fortalecimiento de las capacidades de la empresa. Peor aún, tampoco fueron destinadas al desarrollo de otras industrias y sectores que favorecieran la economía y el desarrollo social.

Pese a tener grandes reservas de cobre y contar con una empresa estatal, la minería en Chile revela una fuerte conexión con el empresariado multinacional y la dependencia económica del país, evidenciado en los tres siguientes aspectos.

Primero, existe una alta dependencia de las exportaciones de cobre, con un 65% a un 72% dirigido a países asiáticos, liderado por China (35%). Segundo, la explotación de nuestros recursos naturales está dominada por empresas extranjeras como BHP (Australia), Freeport (EE. UU.), Glencore (Suiza) y Grupo México (México), que explotan en conjunto un 44%, mientras Codelco sólo el 14% en 2020. En tercer lugar, la importación de productos tecnológicos fabricados con nuestras materias primas es insólita. En 2020, Chile importó \$43 millones de dólares en tuberías de cobre, principalmente de México y China, mientras exportó sólo \$2 millones de dólares en el mismo material.

El modelo extractivista de las riquezas mineras que se ha seguido en nuestro país posibilita que las empresas y los países de economías industrializadas mantengan su injerencia y puedan definir los precios de los minerales, así como establecer las reglas comerciales de los mismos, esto genera una fuerte dependencia de Chile.

Estas relaciones económicas internacionales obligan a Chile a seguir el camino impuesto por potencias económicas que aseguran que la manera de aprovechar sus ventajas competitivas es exclusivamente la mono-producción de materias primas. Mientras los países potencias, para conseguir la posición estratégica que poseen, desarrollaron una industria sofisticada y diversificada en lugar de mero extractivismo.

Una empresa nacional del litio no significa un escenario distinto bajo la experiencia analizada. Toda la evidencia apunta a que es un titular grandilocuente que esconde el carácter neoliberal que sostiene el gobierno. Es esta misma lógica de vestirse de progresista, para disimular el carácter profundamente neoliberal, la que explica la insistencia del gobierno en reiterar la y a conocida receta de la “alianza público privada”.

Alianza Público-Privada

El concepto de alianza público-privada es un recurso ideológico planteado en el marco del sistema de dominación actual, donde se instala que el Estado no sería capaz de gestionar los servicios e industrias de la economía y se requeriría del apoyo de los actores privados para desarrollar los intereses nacionales. Esta realidad ha sido construida de manera intencionada por quienes han ostentado el poder del Estado

de la explotación del metal rojo quedan en manos de estos últimos.

Según datos de Cochilco, la Estatal pasó de ser una de las titulares mayoritarias a perder progresivamente las hectáreas de superficie explotable. En 2005, Codelco contaba con más del 10% de la superficie de explotación minera total. En la siguiente década esta cifra disminuyó de forma progresiva a menos de la mitad, mientras se expandió para la minería privada. Otro dato ejemplificador es que anualmente la minera estatal aporta en promedio el 30% de la producción nacional de cobre desde 2005, en contraste, la minería privada alcanza un 70% en el mismo período. De forma contradictoria, del total recaudado por el Estado por la minería privada y pública, Codelco aporta entre un 55-66%, mientras que sólo el tercio restante es aportado por el royalty y el impuesto a la renta por parte de la minería privada. Es decir, si bien Codelco tiene la parte minoritaria de la producción, aporta la porción mayoritaria de recursos al Estado en comparación a los privados.

Adicionalmente, Codelco se encuentra en desventaja competitiva. En el momento de mayor rentabilidad del sector, las utilidades de la



los últimos 50 años.

Este concepto se utiliza para esconder o disimular la completa privatización de las políticas públicas y la absoluta subordinación del poder del estado al capital privado. Se viste de “alianza” una forma de entregar recursos a entidades privadas sin mayores restricciones a su negocio. Esto, en los hechos, es la negación de cualquier perspectiva estratégica de desarrollo nacional.

Por definición el sector privado, conformado por empresas, corporaciones, sociedades de inversiones, etc. es una maquina diseñada para capturar los beneficios mientras se socializan los costos de producción. La prevalencia de los intereses nacionales, la sociabilización de los beneficios, el cuidado del medioambiente y de los recursos naturales sólo es posible cuando el Estado ejerce un control férreo sobre el sector privado. En el marco de políticas públicas, donde el sector privado controla la actividad productiva, hablar de interés nacional o estrategia de desarrollo para el país es irrisorio.

Desarrollo económico y científico tecnológico

La Estrategia Nacional del Litio promete la producción de litio con valor agregado como un modo de sacar provecho de nuestros recursos naturales, en lugar de sólo comercializarlos como materia prima. Sin embargo, esto nuevamente queda sometido al desarrollo de los privados. Gigantes comerciales del rubro de las baterías de litio como BYD o Tsingshan, han prometido una gran inversión y se instalan como los actores encargados de sacar provecho al mineral.

Las empresas privadas que desarrollan productos en base a litio no estarían obligadas a transferir su tecnología al Estado para que pueda insertarse en el mercado del litio con valor agregado. Por lo que se sigue operando con la lógica concesionaria.

Si bien se ha presentado un Fondo Anillo para proyectos de investigación, innovación y desarrollo, mientras no exista una empresa estatal única con capacidad de implementar dichos descubrimientos no hay garantías de que el Estado recupere lo invertido y se beneficie a la sociedad, ya que en muchos casos estos conocimientos se venderán a privados.

Continuidad neoliberal, pero con distinto mineral

La Estrategia Nacional del Litio reproduce una matriz productiva extractivista, donde Chile ve desaprovechada nuevamente una oportunidad de desarrollar industria propia, producto de posicionar las necesidades de las economías dominantes y la acumulación de capital privado por sobre una estrategia propia. Con esto es claro que la política planteada no tiene un carácter nacional, ya que en ella no prevalecen intereses que pongan en el centro el beneficio del total de

la población, el cuidado y preservación de nuestros recursos naturales y que prioricen el desarrollo de nuestro país. Además, no se anticipa con iniciativa a la situación global del litio, sino que reacciona ante las presiones económicas, por lo que la estrategia nacional pareciera más bien lo que los actores extranjeros esperan que el gobierno haga.

La continuidad neoliberal de esta política radica en que uno de los pilares fundamentales del modelo económico chileno es la condición de país primario-exportador, donde el empresariado rentista puede aprovechar la ganancia de la explotación de las materias primas en forma cortoplacista, descartando las vías de desarrollo industrial a largo plazo. Esto promueve un modelo capitalista de carácter rentista donde la inversión privada se orienta en acaparar el recurso.

Por otro lado, el Estado se adapta a las necesidades de las empresas extractivistas de litio, instalando nuevas formas de concesionar u otorgar permisos de extracción, mientras se pregona la instauración de la empresa nacional del litio, que, sin tener un protagonismo ni control estratégico sobre el control de esta rama de la economía, pasa a llenar los titulares como si fuera el objetivo principal de esta política. Para que el litio y los recursos naturales sean de todos, y sus riquezas puedan ser un aporte a las condiciones económicas y de vida de toda la



población, debemos buscar los siguientes principios para su aprovechamiento:

- Se deben explotar de manera centralizada y su producción debe ser planificada por el Estado en virtud de integrar todos los aspectos de la economía y, por lo tanto, de las necesidades e intereses de la población. Además, se debe incorporar el conjunto de las estructuras de la sociedad, donde las decisiones puedan ser tomadas

estratégicamente.

- Se debe buscar el desarrollo de todos los aspectos tecnológicos, científicos e innovativos para que la explotación responda a un desarrollo de nuestra industria de manera global y sus riquezas puedan beneficiar efectivamente al conjunto social.

Con esto, la explotación de los recursos naturales y minerales debe ser controlada por el Estado, cuya naturaleza permite que se cumplan las condiciones anteriores. Sin embargo, el carácter de esta institución debe cambiar, rompiendo su subordinación ante los actores empresariales transnacionales y nacionales, y responder a la dirección que le otorgue la mayoría popular, para que se haga efectiva la propiedad de estos recursos por parte de toda la población, y no una minoría reducida.

En conclusión, rechazamos la Estrategia Nacional del Litio, en tanto como política intenta aparentar un rol protagonista del Estado en la explotación del Litio, sin embargo, no apunta a resguardar intereses nacionales ni implementar una estrategia, sino que fortalece la dependencia económica y reproduce el extractivismo, pilar de nuestro modelo neoliberal. Por lo tanto sigue alimentando en la psicología de la burguesía nacional la mentalidad de comerciantes y no de capitanes de industria.

Es claro que el gobierno busca aparentar un “giro” en la forma que se explotan los recursos naturales. Como ya vimos con el caso de Codelco con una empresa estatal por sí sola no significa un Estado relevante en la economía, mientras que se justifica, de forma contradictoria, la necesidad del privado en la explotación del litio por medio de las maniobras de la “Alianza Público Privada”, herramienta para elaborar políticas estatales con carácter privado.

Como profesionales convocación denunciaremos esta política, que sólo representa un nuevo orden institucional para la explotación de un recurso natural que podría ser un avance importante en términos económicos, científicos, tecnológicos, sociales e incluso ambientales, pero que hoy se renuncia a ello por meros intereses privados, con justificaciones mezquinas.

Los profesionales de la economía, ciencias, minería e ingeniería deberíamos pensar en el desarrollo económico nacional que aporte condiciones, tecnología y acceso a las riquezas para todo el pueblo, y no reproducir la realidad económica del tercer mundo.

